



**BIBLIOTECA VIRTUAL DE CIENCIAS SOCIALES DE AMERICA LATINA
Y EL CARIBE, DE LA RED DE CENTROS MIEMBROS DE CLACSO**

<http://www.clacso.org/wwwclacso/espanol/html/biblioteca/fbiblioteca.html>

Como citar este documento

Boron, Atilio. **Estado, capitalismo y democracia en America Latina**. *Coleccion Secretaria Ejecutiva*, Clacso, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Agosto 2003. p. 320. 950-9231-88-6. Disponible en la World Wide Web:

<http://www.clacso.org/wwwclacso/espanol/html/libros/estado/estado.html>

E-mail: clacso@clacso.edu.ar

INTRODUCCIÓN
DESPUÉS DEL SAQUEO:
EL CAPITALISMO LATINOAMERICANO
A COMIENZOS DEL NUEVO SIGLO

“No. No aceptes lo habitual como cosa natural. Porque en tiempos de desorden, de confusión organizada, de humanidad deshumanizada, nada debe parecer natural. Nada debe parecer imposible de cambiar”.

Bertolt Brecht

Más de diez años han transcurrido desde que este libro viera originalmente la luz, en los inicios de la década de los noventa. Desde entonces, muchas cosas han cambiado en América Latina y, como sabemos, no todas para bien. Es por eso que la preocupación central de esta obra, el examen de las posibilidades y límites de un capitalismo democrático en los países de la periferia, conserva una angustiante actualidad. Algunas de las anticipaciones teóricas que allí se formulaban pueden ahora examinarse con la rigurosidad que permite la investigación de la historia contemporánea. Desafortunadamente, las tesis principales del libro, que en su momento fueron calificadas por sus críticos como expresiones anacrónicas de un sesentismo mal digerido, o como la inadmisibles supervivencia de viejos dogmas o concepciones sectarias, fueron rotundamente confirmadas por el devenir de los hechos históricos.

Repasemos sucintamente algunas de las principales conclusiones expuestas en la primera edición de nuestro libro:

- la lucha por la democracia en América Latina, es decir, la conquista de la igualdad, la libertad y la participación ciudadana, es insostenible al margen de una lucha contra el despotismo del capital. Más democracia implica, necesariamente, menos capitalismo (Capítulo 2).
- el neoliberalismo remata en una concepción y una práctica profundamente autoritaria en la gestión de la cosa pública. Por eso el dilema neoliberal no es entre estado y mercado, sino entre democracia y mercado. Y sus representantes no vacilan en sacrificar la primera en aras del segundo (Capítulo 3).
- el predominio *de facto* de los intereses de las clases dominantes, derrotadas en la arena electoral pero triunfantes en las “alturas” del aparato estatal, ha quebrado las expectativas de justicia que grandes sectores sociales habían depositado en el naciente orden democrático. Las ominosas secuelas de esto no tardarán en hacerse sentir (Capítulo 4).

- los agentes sociales de la democracia no pueden aspirar a “democratizar el mercado”. En ese reino privilegiado de los intereses privados no caben los argumentos de la justicia distributiva (Capítulo 5).
- el capitalismo latinoamericano es tan reaccionario que aún las más tímidas reformas son percibidas como instancias catalizadoras de la revolución y, en cuanto tales, combatidas con ferocidad por las clases dominantes (Capítulo 5).
- el discurso del “realismo posibilista” es incapaz de transformar la realidad y termina glorificando el *status quo*, consolidando las inequidades e injusticias estructurales de la sociedad y frustrando las expectativas populares en relación con la recuperación de la democracia (Capítulo 5).
- las políticas neoliberales provocan el progresivo vaciamiento de los nuevos regímenes democráticos. Estos se convierten en una pura forma, y la vida social regresa al paroxismo de una situación “cuasi-hobbesiana” de lucha de todos contra todos, de “sálvese quien pueda”, que abre las puertas a toda clase de comportamientos aberrantes (Capítulo 7).
- el marxismo no es una colección de dogmas fosilizados y canonizados, cuyo “éxito” teórico y práctico se encuentra garantizado de antemano. Sin la praxis creativa de los hombres y las mujeres que son los hacedores reales de la historia, la noble utopía diseñada por Marx puede frustrarse, y lo que hoy conocemos como “civilización” replegarse a la más oscura barbarie (Capítulo 8).

Lamentablemente, el inapelable veredicto de la historia ha corroborado los pronósticos que formuláramos hace ya más de una década en torno al curso del desarrollo capitalista en nuestra región. No se trataba de un pesimismo visceral ni del perverso deseo de que las cosas “salieran mal” en el nuevo ciclo histórico que se iniciaba en América Latina con el advenimiento de las democracias. Dichas previsiones se fundaban en un análisis concreto de la naturaleza y dinámica de los capitalismo latinoamericanos que no permitía compartir las ilusorias predicciones formuladas desde el saber convencional de las ciencias sociales sobre el futuro de las nuevas democracias y el tipo de sociedad resultante de los procesos de reestructuración capitalista en marcha. Tal como lo hemos repetido en numerosas oportunidades, ese debate ha quedado saldado, no como producto de una polémica escolástica sino como resultado de la vida práctica de nuestros pueblos.

En efecto, ya no quedan dudas sobre el significado y objetivo de las políticas neoliberales; tampoco en lo tocante a las limitaciones de la democratización iniciada bajo tantas esperanzas en los años ochenta. Los mitos que ocultaban las verdaderas intenciones de dichas políticas se evaporaron en el horno incandescente de la práctica histórica. Lo que antes eran previsiones teóricas y posiciones fuertemente combatidas por los representantes del pensamiento único dan ahora paso al penoso recuento del saqueo, al luctuoso inventario de las víctimas que han quedado en el camino, al desalentador balance del despojo de nuestras riquezas y el robo de nuestros sueños. El

pseudo-“reformismo” del Consenso de Washington quedó al desnudo, y cuando se disiparon los humos de la batalla y las ilusiones fomentadas por la propaganda difundida por las grandes agencias de indoctrinamiento ideológico del capital lo que apareció ante nuestros ojos fue un paisaje aterrador: un continente devastado por la pobreza, la indigencia y la exclusión social; un medioambiente agredido y en gran parte destruido, sacrificado en el altar de las ganancias de las grandes empresas; una sociedad desgarrada y en acelerado proceso de descomposición; una economía cada vez más dependiente, vulnerable, extranjerizada; una democracia política reducida a poco más que un periódico simulacro electoral, pero en donde el mandato del pueblo (palabra que, dicho sea al pasar, fue desterrada del lenguaje público y reemplazada por otras más anodinas, “la gente”, por ejemplo, o más engañosas, como la “sociedad civil” o la “ciudadanía”), para no hablar de sus esperanzas y expectativas, son sistemáticamente desoídos por las sucesivas autoridades que se constituyen después de los comicios; y por último, en un listado que no pretende ser exhaustivo, un estado en algunos casos acribillado por la corrupción y casi siempre penosamente impotente para lidiar con los desafíos de nuestro tiempo y para poner coto a la vocación antropofágica de los monopolios, el gran capital imperialista y sus aliados.

Atrás quedaron las ilusiones prolijamente cultivadas por los aparatos ideológicos del capital: tal como era de esperar, el famoso “efecto derrame” (*trickle-down*) que según la teoría neoliberal descargaría pródigamente sobre los hogares de los más pobres parte de la riqueza acumulada por los más ricos no se produjo. En su lugar hemos visto el fenomenal aumento en la concentración de la riqueza, que hizo que nuestros ricos se enriquecieran cada día más mientras abajo crecía aceleradamente el número de pobres e indigentes que se sumían en una privación sin precedentes en nuestra historia. La apertura comercial, que supuestamente sería correspondida por una movida equivalente practicada por los países capitalistas desarrollados, terminó siendo un gesto autista, con catastróficas consecuencias en los niveles de empleo de nuestras sociedades. Las privatizaciones consagraron el saqueo legal del patrimonio público y su traspaso a grandes monopolios –¡en muchos casos empresas estatales de las metrópolis imperialistas!– que de ese modo se quedaron, a precio vil, con empresas y recursos que los países habían acumulado a lo largo de varias generaciones. Por último, la desregulación financiera, exaltada por el catecismo neoliberal como segura fuente de ingreso de capitales para nuestra región, convirtió a la mayor parte de las economías de América Latina y el Caribe en sucursales de ese gigantesco casino mundial que según Susan Strange es el sistema financiero internacional.

No sorprende pues constatar la creciente desestabilización social de nuestros países y los preocupantes signos que hablan de la debilidad de sus reconquistadas democracias. Este es un dato que suelen pasar por alto quienes se conforman con una mirada sobre las apariencias y los aspectos más superficiales de la realidad. Lo cierto, en cambio, es que más allá de los formalismos las democracias latinoamericanas se han ido vaciando de contenidos. Por eso no suscitan ni esperanzas ni

expectativas, y sus promesas han caído en el vacío. No por casualidad las diversas encuestas de opinión que se practican en la región registran el alto grado de frustración de los ciudadanos con los desempeños de los gobiernos democráticos. El escepticismo, la apatía y la indiferencia ante los dispositivos institucionales de la democracia crecieron sin pausa en los últimos años. De persistir este desencanto será apenas cuestión de tiempo antes de que el mismo se extienda desde los gobiernos que se supone deben encarnar las aspiraciones de la democracia al régimen democrático en sí mismo. Este contagio será inevitable en la medida en que los gobiernos, con apenas ligeras diferencias entre ellos, se desentendieron de la suerte de los ciudadanos y concentraron sus esfuerzos en complacer las demandas de las minorías y de una rapaz plutocracia que se presenta como la concreción histórica de las conquistas democráticas y las virtudes del libre mercado.

La expresión política de esta insatisfacción ciudadana ha sido muy variada: va desde la insurgencia zapatista de Chiapas hasta las formidables movilizaciones del 19 y 20 de diciembre de 2001 en la Argentina que derrocaron al gobierno de Fernando de la Rúa. Otros hitos en este sendero fueron las insurrecciones indígenas y campesinas del Ecuador; la protesta urbana en el Perú que precipitó primero la caída de Alberto Fujimori y que tiene ahora en jaque al gobierno de Alejandro Toledo, bendecido desde sus inicios por George W. Bush en persona; las luchas de los trabajadores de la salud en El Salvador; la nueva insurgencia popular boliviana, vinculada a la lucha por el agua, la defensa de los cultivos autóctonos y contra las políticas de ajuste; la aplastante derrota sufrida por el candidato del continuismo neoliberal en Brasil, José Serra, a manos de Luis Inacio “Lula” da Silva; el ascenso y consolidación de Hugo Chávez en la presidencia de Venezuela, resistiendo a pie firme la conspiración urdida, con el beneplácito de la Casa Blanca, por los sectores más reaccionarios y corruptos de la sociedad venezolana; la conformación de un impresionante movimiento de protesta en el México de Fox, “El Campo No Aguanta Más”, en contra de las políticas neoliberales incitas en el NAFTA; y, finalmente, el masivo repudio que concitara en las elecciones presidenciales de la Argentina, en abril de 2003, la tentativa de retorno de quien fuera el paradigma de las políticas neoliberales en la región, Carlos Saúl Menem.

En las páginas que siguen procuraremos aportar una visión de conjunto, a vuelo de pájaro, sobre las transformaciones operadas en las sociedades latinoamericanas en los años recientes.

NATURALEZA Y ALCANCES DEL “REFORMISMO” NEOLIBERAL

La década de los ochenta fue testigo de una verdadera oleada reformista que, de manera desigual, afectó a la casi totalidad de los países de nuestra región. Antes de presentar sus contornos más sobresalientes conviene empero detenerse brevemente para despejar una cuestión semántica para nada intrascendente.

Resulta que se ha convertido en un lugar común hablar de “reformas” para referirse a aquello que, en la tradición del pensamiento político occidental, responde mejor a la expresión “contra-reforma”. Hemos explorado este tema en otro lugar, razón por la cual no nos extenderemos ahora en esa consideración¹.

Bástenos con decir que en realidad las políticas llevadas a cabo en nuestra región, lejos de haber introducido “reformas” –esto es, cambios graduales en una dirección tendiente hacia una mayor igualdad, bienestar social, y libertad para el conjunto de la población, tal como lo indicaría la palabra “reforma” en la tradición de la filosofía política–, lo que hicieron fue potenciar una serie de transformaciones que recortaron antiguos derechos ciudadanos, redujeron dramáticamente las prestaciones sociales del estado y consolidaron una sociedad mucho más injusta y desigual que la que existía al comienzo de la etapa “reformista”. Lo que ocurre es que la victoria ideológica del neoliberalismo se expresa, entre otras cosas, por un singular deslizamiento semántico que hace que las palabras pierdan su antiguo significado y adopten otro nuevo y, en algunos casos, como éste, claramente antitético. En ese sentido, las “reformas” padecidas por nuestras sociedades en las últimas décadas son, en realidad, crueles “contra-reformas” y acentuados procesos de involución social.

Uno de los más militantes ideólogos de esta peculiar forma de “reformismo”, Sebastián Edwards, ex-economista jefe del Banco Mundial, brindaba una versión extraordinariamente optimista de lo acontecido desde los años ochenta: “A mediados de 1993, los analistas y medios económicos internacionales recibían las reformas hacia una política de mercado como un éxito y proclamaban que varios países latinoamericanos iban camino de convertirse en una nueva generación de ‘tigres’. Los inversores extranjeros se aproximaron rápidamente a la región y los consultores y estudiosos se apresuraron a analizar las experiencias de Chile, México y Argentina con el fin de aprender de primera mano cómo unos países que, sólo unos años antes, habían parecido no tener esperanza, se habían vuelto tan atractivos para el dinero internacional”². En función de esta peculiar aprecia-

1. Una aceptación acrítica del contenido de dichas reformas prevalece en gran parte de la literatura convencional de las ciencias sociales. Dentro de este conjunto, las visiones más lúcidas se encuentran en la obra de Juan C. Torre *El proceso político de las reformas en América Latina*, Buenos Aires, Editorial Paidós, 1998. También en el libro de Luiz Carlos Bresser Pereira, José M. Maravall y Adam Przeworski *Economic Reforms in New Democracies. A Social-Democratic Approach*, Cambridge, Cambridge University Press, 1993. La lucidez y sutileza de sus análisis no los exime, lamentablemente, de caer en un discurso que en el fondo termina ratificando, sobre todo en el caso de Torre, la legitimidad de las políticas de ajuste y estabilización llevadas a cabo en concordancia con el catecismo del Consenso de Washington. Una crítica a estas concepciones se encuentra en Atilio A. Boron, *Tras el Búho de Minerva. Mercado contra democracia en el capitalismo de fin de siglo*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2000.

2. Hemos alterado en parte los nombres de cada una de esas categorías a los efectos de reflejar con mayor nitidez sus principales características. Cf. Sebastián Edwards, *Crisis y reforma en América Latina*, Buenos Aires, Emecé, 1997, 17. La primera edición apareció como Banco Mundial *América Latina y el Caribe. Diez años después de la crisis de la deuda*, Washington D.C., World Bank, 1993. Remitimos al lector al comentario que efectuamos en la nota 11 de este capítulo.

ción, Edwards procede a dividir a los países de la región en cuatro categorías, como puede verse a continuación³.

Pioneros, o primeros reformadores (reformas iniciadas a finales de los años setenta y comienzo de los ochenta)	Bolivia, Chile, México
Reformistas de la segunda oleada (reformas iniciadas a finales de los ochenta)	Costa Rica, Ecuador ⁴ , Jamaica, Trinidad y Tobago, Uruguay
Reformadores tardíos, o reformistas de la tercera oleada (reformas iniciadas en los años noventa)	Argentina, Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Venezuela
No reformistas	Haití, República Dominicana

El tiempo transcurrido desde la iniciación de estas “reformas” permite evaluar de forma más completa los méritos de los distintos “reformadores”. Ya no se trata de algún que otro dato circunstancial sino de un análisis mucho más profundo, que permite identificar las tendencias de largo plazo que se han desarrollado al calor de las nuevas políticas implementadas desde el auge de las ideas neoliberales en los ochenta y noventa. Desde ya, cualquier análisis que se practique, con cualquier metodología, arrojará un resultado que seguramente decepcionará a nuestro autor: diez años después de tan jubiloso diagnóstico nuestra región no ha producido un solo “tigre” económico, para no hablar de una entera generación de ellos.

Al referirse a los procesos de reforma que tuvieron lugar en Brasil, un “reformador tardío”, Francisco de Oliveira, anotaba que en realidad el nombre de “reforma del estado” era un título que no guardaba demasiada correspondencia con la realidad. Al igual que lo ocurrido en otros países de la región, bajo ese nombre se ocultó una política mucho más pedestre: recorte brutal del presupuesto público, despido masivo de funcionarios del estado, y dramático recorte de los derechos laborales de los sobrevivientes. Vista en perspectiva histórica, a esto se ha reducido la tan mentada “racionalización” del sector público promovida por los gobiernos del G-7, el FMI, el Banco Mundial y el BID y llevada a cabo por los gobiernos de la región⁵. Pocos años después sería el propio Banco Mundial el que habría de lamentarse ante las deprimentes implicaciones de esta política.

Las observaciones de de Oliveira son pertinentes también al resto de América Latina, en donde la necesaria e impostergable reforma del estado fue acometida

3. Sebastián Edwards, *Crisis y reforma en América Latina*, Buenos Aires, Emecé, 1997, 18-19.

4. Incluido por nosotros, pues en la elaboración original de Edwards este país figura como “no reformista”, ignorando la significación que tuvo el proceso lanzado por el gobierno neoliberal de León Febres Cordero a finales de los años ochenta y la dolarización de la economía ecuatoriana a finales de la década de los noventa.

5. Emir Sader (compilador), “Um governo de (contra-)reformas”, en *O Brasil do Real*, Río de Janeiro, EDUERJ, 1996, 94-95.

por gobiernos dominados por un fundamentalismo neoliberal que los condujo primero a la satanización del estado y luego a su lisa y llana destrucción. Las consecuencias de estas políticas, promovidas por las así llamadas “instituciones económicas multilaterales” –eufemismo para designar al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización del Comercio Mundial, entre otras– gracias a las “condicionalidades” que imponían a deudores exangües y en bancarota, fueron por una parte un dramático aumento de la exclusión social en la totalidad de los países de la región, y por la otra un preocupante debilitamiento del impulso democrático que tantas esperanzas había suscitado en nuestros países desde la década de los ochenta.

Este proceso tuvo lugar en momentos en que el estado como institución era objeto no sólo de ataques prácticos (como las privatizaciones, sus reducciones presupuestarias, etc.) sino también de naturaleza doctrinaria, y en los cuales aquél aparecía como una instancia insanablemente corrupta, ineficiente en lo económico, y plagada de propensiones populistas y demagógicas que era necesario erradicar. Sin embargo, mientras se llevaban a cabo estos ataques, una suerte de “astucia de la razón” hegeliana devolvía a esa institución la “centralidad” e importancia que le era negada en otros terrenos. Así, su irremplazable contribución se vio paradójicamente reafirmada por una sucesión de “cumbres” gubernamentales que, sostenidas en la década de los noventa y a contracorriente del ethos neoliberal predominante, subrayaban la necesidad de que los gobiernos pusieran en marcha un amplio conjunto de políticas activas para combatir a la pobreza (Copenhague), promover los derechos de la mujer (Beijing), controlar el aumento desorbitado de la población (Cairo) o preservar la biodiversidad y el medio ambiente para las siguientes generaciones (Río de Janeiro). En todos estos casos, en los cuales se confrontaban graves problemas de diverso tipo, de alcance civilizacional, la bancarota del neoliberalismo se hizo evidente al punto tal que hasta sus más acérrimos partidarios tuvieron que reconocer que la “magia de los mercados” no tenía la menor posibilidad de encontrar una salida positiva a las crisis analizadas en las cumbres, y que para resolver estos problemas lo mejor que podía hacerse era acudir a los estados.

Esta convicción, que socavaba silenciosamente al anti-estatismo neoliberal, adquirió perfiles aún más contundentes al ser ratificada por uno de los “gurúes” del pensamiento económico libremercadista, Peter F. Drucker. En un artículo publicado en el número conmemorativo del 75º aniversario de la revista *Foreign Affairs*, Drucker examina lo ocurrido con los estados nacionales en el contexto de la globalización y luego de comprobar la “asombrosa resistencia” de aquellos a los influjos de la segunda concluye que “el estado nación tiene todas las probabilidades de sobrevivir a la globalización de la economía y la revolución informática que la acompaña”⁶. Descarta, de ese modo, una de las creencias más difundidas del pensamiento

6. Peter Drucker, “The Global Economy and the Nation State”, en *Foreign Affairs* Vol. 76, Nº 5, Septiembre-Octubre, 1997, 160.

único de fines del siglo XX: la ilusión de la desaparición estatal, cuya influencia no sólo se extiende entre los intelectuales e ideólogos de la derecha sino que alcanza también a importantes franjas del pensamiento contestatario, como queda en evidencia en la reciente producción de Michael Hardt, John Holloway y Antonio Negri⁷.

En el caso argentino, objeto preferencial de atención en las páginas que siguen debido a los perfiles caricaturescos que entre nosotros adquirió el experimento neoliberal, esta tarea de destrucción fue cumplida al pie de la letra por sucesivos gobiernos. Le cabe sin embargo al decenio presidido por Carlos Saúl Menem el dudoso mérito de haber sido el verdadero campeón de esta cruzada neoliberal. En Argentina, la llamada “destrucción creadora” del capitalismo, tan exaltada en la obra de Joseph Schumpeter, se limitó exclusivamente al primer término de la ecuación: la destrucción estuvo a la orden del día, mientras que la obra de la creación se encuentra todavía en veremos. Algo similar ocurrió con las tantas “terapias de shock” recomendadas por el FMI para “solucionar” los problemas de las economías latinoamericanas. Abundaron los “shocks”, pero las terapias brillan por su ausencia. En el caso argentino el desmantelamiento del estado ha llegado tan lejos que ha dejado al país a merced de todo tipo de circunstancias: si se incendian los bosques naturales de la cordillera –como ocurriera, por negligencia criminal, a comienzos de 1996– ya no se dispone de aviones hidrantes para combatir el fuego ni de equipos adecuados para enfrentar esta catástrofe. Tan lejos ha llegado la impericia oficial que a los efectos de poder contar con algunos elementos para combatir los nuevos incendios el gobierno nacional decidió descontar del presupuesto universitario unos cinco millones de dólares para destinarlos a la preservación del bosque patagónico. Otro ejemplo tan absurdo como el anterior lo proporciona el hecho de tener grandes regiones de la provincia de Buenos Aires inundadas a causa de la falta de mantenimiento de las vías de desagüe de los ríos y lagunas pampeanas y la indefinida postergación de nuevas obras. De este modo, los “ahorros” obtenidos ante la inacción oficial, justificada por la estrechez presupuestaria motivada por la necesidad de controlar el gasto público, originan pérdidas muchísimas mayores en la producción, pero esto es un detalle menor que no perturba el sueño de los gobernantes, empeñados como están en lograr un ajustado “cierre de cuentas fiscales” que apacigüe las iras de los enviados del FMI y facilite la obtención de nuevos préstamos. Todo esto no sería tan grave si, al mismo tiempo, los voceros del neoliberalismo no se desvivieran ase-

7. Hemos examinado *in extenso* este tema en Atilio A. Boron, *Imperio & imperialismo. Una lectura crítica de Michael Hardt y Antonio Negri*, Buenos Aires, CLACSO, 2001 y en nuestro artículo “Poder, ‘contra-poder’ y ‘antipoder’”. Notas sobre un extravío teórico político en el pensamiento crítico contemporáneo”, en *Chiapas*, Buenos Aires/México, N° 15, Agosto de 2003. Los autores aludidos remiten a sus obras de reciente publicación. Michael Hardt y Antonio Negri *Empire*, Cambridge Mass., Harvard University Press, 2000. Traducción al español: *Imperio*, Buenos Aires, Paidós Estado y Sociedad, 2002 y John Holloway, *Cambiar el mundo sin tomar el poder. El significado de la revolución hoy*, Buenos Aires, Universidad Autónoma de Puebla/Herramienta, 2002.

gurando que tamaña irracionalidad es necesaria para “atraer” las inversiones y reducir o simplemente suprimir los impuestos que afectan a las grandes empresas y las grandes fortunas.

Fiel a esta creencia, en su momento el gobierno argentino hizo suya la propuesta del por entonces ministro de Economía Domingo Felipe Cavallo de eliminar los “impuestos discriminatorios” que injustamente, y como expresión de un incalificable resentimiento populista o socialista, gravaban a las bebidas cola, el champagne y las alfombras de lujo. Como dicha iniciativa implicaba una merma de unos 300 millones de dólares anuales en ingresos tributarios, el gobierno propuso a cambio aumentar en dos años la edad mínima de jubilación de las mujeres, de 60 a 62 años, y de ese modo aprovechar las excelentes condiciones de salud y atención médica de que se dispone en la Argentina para compensar los ingresos perdidos por la supresión de aquellos impopulares impuestos. Ejemplos tragicómicos como éstos podrían multiplicarse *ad infinitum*, especialmente si se recuerda que el caso argentino, si bien fue el más radical, estuvo lejos de haber sido el único en la región. La verdadera “cruzada” que los gobernantes de nuestros países han emprendido en contra de una institución como el estado, completamente satanizada por la ideología dominante, es un monumento a la irracionalidad, no sólo en términos sociales –pues resulta en una verdadera “eutanasia de los pobres,” como se aprecia con singular nitidez en el caso argentino– sino también en función de la propia lógica del desarrollo capitalista⁸.

Para resumir, el veredicto de la historia es inapelable: las “reformas” neoliberales fracasaron miserablemente en tres aspectos fundamentales: no lograron promover un crecimiento económico estable; no consiguieron aliviar la situación de pobreza y exclusión social que prevalecía en nuestra región como producto del desplome del modelo de industrialización sustitutiva de importaciones y la crisis de la deuda; y lejos de fortalecer las instituciones democráticas y su legitimidad popular, este modelo tuvo como consecuencia debilitarlas y desprestigiarlas hasta un nivel sin precedentes en la historia latinoamericana.

POLÍTICAS NEOLIBERALES Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

En lo relativo al crecimiento económico la performance de las economías latinoamericanas a partir de 1980 difícilmente podría haber sido más decepcionante. El producto bruto interno creció a un ritmo anual medio de 1,7% en la década de los ochenta, y a 3,4% en la siguiente. Dado que en el primero de estos períodos el crecimiento de la población se situaba en el 2% anual, esto significó una caída en el PBI por habitante de alrededor de 0,3% por año a lo largo de toda la década, con

8. Atilio A. Boron, “La sociedad civil después del diluvio neoliberal”, en Emir Sader y Pablo Gentili (compiladores) *La Trama del Neoliberalismo. Mercado, Crisis y Exclusión Social*, Buenos Aires, CLACSO-EUDEBA, 2003.

justa razón denominada la “década perdida.” En la siguiente, con la tasa de crecimiento poblacional un tanto más disminuida, apenas si se revirtió la tendencia, quedando el crecimiento del PIB per cápita en una cifra cercana a un modesto 1,7% anual. Siendo positiva, esta magnitud equivale a menos de la mitad de las tasas de crecimiento del PIB per cápita que prevalecían en la región en las tres décadas comprendidas entre los años de la posguerra y la crisis de mediados y finales de la década de los setenta, cuando según los diagnósticos del FMI y el BM las políticas económicas en vigencia adolecían de incurables defectos y conducían a los países de la región por el sendero del atraso y el estancamiento⁹.

Según Edwards, los pioneros en el reformismo de mercado contaron con una ventaja: pudieron avanzar muy rápidamente en el terreno de las transformaciones estructurales. Esta afirmación se realiza sin abrir la menor discusión, por cierto que imprescindible, sobre el signo de tales transformaciones. Es decir, sin examinar quiénes fueron sus beneficiarios y quiénes sus víctimas, para no hablar de una valoración más comprensiva que nos indique si finalmente estas “reformas” colaboraron en la construcción de una sociedad mejor o si, por el contrario, dejaron como legado una sociedad más injusta y desigual que la que le precediera. Nuestro autor no ahorra palabras para exaltar el caso chileno, al que eleva a la categoría de modelo para imitar, “porque comenzó las reformas en 1975, casi diez años antes que todos los demás”¹⁰. Es por eso que en dicho país las reformas están muy avanzadas y han marcado casi todas las facetas de la vida económica, política y social. Por supuesto, Edwards no se pregunta si es bueno o malo que casi todas las facetas de la vida chilena se encuentren impregnadas de la lógica mercantil. Tampoco demuestra la menor inquietud por examinar algo que no constituye un dato menor, o anecdótico: el hecho de que las mismas hubieran sido iniciadas y perfeccionadas en el contexto de la más sangrienta dictadura jamás conocida por Chile, seguramente un tema “político” sobre el cual un economista “serio” jamás debe explayarse. Además, Edwards pasa completamente por alto el hecho de que la aplicación de estas políticas –que comienza inmediatamente después del golpe de estado de Pinochet en 1973– desembocó en el fenomenal *crash* financiero de 1982, y que recién luego de 1985 la economía chilena retomó un sendero de crecimiento. Claro está que lo hizo al adoptar una política que se apartaba en algunos aspectos fundamentales de las recomendaciones del Consenso de Washington al instituir importantes regulaciones para controlar el flujo de capitales externos, preservar a la gran minería del cobre en manos del estado y reforzar la presencia del estado en aspectos clave de la vida económica mediante intervenciones altamente selectivas y eficaces. Más aún: contrariando un mandamiento sagrado del Consenso de Washington, el tamaño del gasto público en Chile aumentó, mientras que en el resto de la región disminuía considerablemente.

9. CEPAL, *Anuario Estadístico 2002*, Santiago de Chile, 2002.

10. Sebastián Edwards, *Crisis y reforma en América Latina*, Buenos Aires, Emecé, 1997, 20.

México, por otra parte, que en una primera versión del libro de Edwards fuera también señalado como otro país en el cual las reformas neoliberales habían llegado a su madurez y se hallaban en vías de consolidación, aparece en la versión definitiva bajo luces mucho menos brillantes¹¹. Haciendo gala de la tradicional retórica pseudo-técnica y valorativamente neutra del saber económico convencional, Edwards apunta que “los acontecimientos sociales (¡sic!) de Chiapas a principios de 1994 y el asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio han introducido ciertas dudas respecto a la dirección exacta en la que van a avanzar las reformas mexicanas durante los próximos años”¹². Como si lo anterior fueran anécdotas sin importancia, Edwards prosigue su análisis impertérrito. Se soslaya, de paso, el papel jugado por esa verdadera “anexión económica” que ese país experimentó con el ingreso al NAFTA y que reforzó extraordinariamente la vulnerabilidad externa de la economía mexicana, sin duda otro dato anecdótico. ¿No sería prudente tomar en cuenta la elocuente coincidencia entre este proceso de reformas y la aparición de la guerrilla zapatista –no tan sólo un mero “acontecimiento social” sino síntoma de la lacerante “deuda social” que aún hoy prevalece en México– y todo un conjunto de nuevos movimientos de protesta en contra de la verdadera eutanasia de los pobres y las pequeñas empresas ocasionada por el NAFTA y que sus empeños “reformistas” no lograron extirpar?

En todo caso, y prosiguiendo con el hilo de nuestra argumentación, los gobiernos reformistas habrían logrado, de acuerdo con esta visión “oficiosa” del Banco Mundial, despejar del camino hacia el crecimiento autosostenido los graves obstáculos que habían frustrado las expectativas latinoamericanas en las décadas precedentes. Sin embargo, una lectura más atenta y menos voluntarista de las cifras que el propio Edwards proporciona en su libro permite extraer otras conclusiones. En efecto, si bien en los años inmediatamente posteriores a la crisis de la deuda (1982-1986) la totalidad de los países de la región experimentó una dramática caída en las tasas de crecimiento del PIB per cápita, el período posterior muestra variaciones muy significativas en el ritmo de la recuperación económica.

Sin duda Chile logra a partir de 1985 salir de la fenomenal crisis en que había caído cuando adoptó con la fe de los conversos las nefastas enseñanzas de la Escuela de Chicago. Pero la acentuada recuperación económica de aquellos años no era sino la contrapartida del descenso a los abismos producido en 1982. En

11. La primera versión del libro apareció bajo el título de *América Latina y el Caribe. Diez años después de la crisis de la deuda*. Se trataba de un trabajo publicado en Washington D.C. por la Oficina Regional de América Latina y el Caribe del Banco Mundial en diciembre de 1993. El mismo no tenía firma autoral alguna y, por lo tanto, debe ser considerado como un documento oficial del Banco Mundial. En la página viii del mismo una pequeña nota dice textualmente: “Este informe ha sido preparado por Sebastián Edwards, economista jefe de la Oficina Regional de América Latina y el Caribe, del Banco Mundial”. La cautela observada en relación al caso mexicano en la versión de 1997, el libro publicado bajo la expresa autoría de Edwards, estaba ausente en la versión anterior.

12. Sebastián Edwards, *Crisis y reforma en América Latina*, Buenos Aires, Emecé, 1997, 20.

todo caso, preciso es reconocer que en los años posteriores esta tendencia se reafirmó para reflejar un nuevo dinamismo nacido de las renovadas condiciones en que se desenvolvía la economía chilena, que habrían de persistir hasta poco antes del final de la década del noventa. Luego, las tasas de crecimiento chilenas habrían de reducirse sensiblemente y, hasta el momento en que se escriben estas líneas no han podido recuperar el impulso que exhibieran en la segunda mitad de los años ochenta.

El caso de Bolivia, en cambio, otro “pionero”, es bien diferente. Este país fue durante un cierto tiempo monitoreado y gestionado casi personalmente por uno de los máximos gurúes del neoliberalismo contemporáneo, el economista de Harvard Jeffrey Sachs. Fiel a su convicción de que cualquier actividad que emprendiera el estado en la vida económica es contraproducente, deficitaria en términos de costos y una permanente tentación para la corrupción, Sachs no ahorró esfuerzos para lograr que el gobierno pusiera en marcha un programa económico que respondiera puntualmente a cada uno de los mandamientos del catecismo neoliberal¹³. No obstante ello, la tasa de crecimiento del PIB per cápita en el país andino fue de apenas el 0,7% anual para el período 1987-1992¹⁴, al paso que datos más recientes de la CEPAL, que abarcan el decenio 1991-2000, reflejan que dicha tasa para todo este período fue del 1,3% por año, muy inferior a la registrada por uno de los países que Edwards califica como recalcitrantemente “no reformador”, la República Dominicana, cuya tasa de crecimiento del PIB per cápita para la década fue del 4% anual¹⁵.

Comentario similar podría hacerse en relación con México, uno de los primeros reformadores y, en cierto sentido, uno de los ejemplos que permanentemente exhiben los economistas vinculados al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional. El país azteca sale de la gran crisis de la deuda de 1982, gatillada precisamente por el *default* mexicano de agosto de ese año, con una tasa de crecimiento del PIB per cápita para el período 1987-1992 del 1% anual. Pese a las optimistas expectativas de Edwards, durante el resto del decenio el comportamiento de la economía mexicana hizo bien poco para avalar la presunta sensatez de las recetas neoliberales. Si en el período 1987-1992 el crecimiento mexicano fue sensiblemente inferior al experimentado por dos países hasta entonces refractarios al reformismo, como Colombia y Venezuela, con tasas del 2 y 1,6% por año, las cifras del período 1991-2000 ilustran de forma aún más contundente las dimensiones de esta decepción. En efecto, y a pesar de las grandes expectativas abiertas con la conformación del NAFTA, el desempeño de la economía mexicana apenas alcanzó una tasa del 1,8% por año, que contrasta desfavorablemente con la de otros países mucho más escépticos ante las prédicas del pensa-

13. En fechas reciente parecería que Sachs ha abjurado de sus antiguas convicciones.

14. Sebastián Edwards, *Crisis y reforma en América Latina*, Buenos Aires, Emecé, 1997, 18.

15. CEPAL, *Anuario Estadístico 2002*, Santiago de Chile, 2002, Cuadro 8.

miento único, como la República Dominicana, que crece en ese mismo período a una tasa del 4%, Panamá, con el 2,7%, y Uruguay, en donde un plebiscito popular puso coto a las política de privatizaciones, con una tasa del 2,2%.

En conclusión, los datos que surgen de la experiencia reciente respaldan plenamente las tesis de los críticos del neoliberalismo. En este sentido cabe señalar que el pobre desempeño económico de la era neoliberal difícilmente pueda ser considerado como sorprendente. Raúl Prebisch advirtió, en un penetrante trabajo publicado en 1982, que lo que aparecía como una gran innovación en el terreno de la teoría y la política económica no era sino una reedición de añejas fórmulas ya ensayadas y fracasadas en el pasado. Decía el fundador de la CEPAL que después de décadas de haber sido marginadas de la escena pública mundial, estas teorías regresaban al primer plano catapultadas por la crisis del keynesianismo. En su primera encarnación estas tesis se condensaban en tres verdaderos “artículos de fe”:

- hay una división internacional del trabajo producto del libre juego de la economía internacional y al cual deben adecuarse los países de la periferia. Versión contemporánea de esta teoría: la globalización, fenómeno “natural” e irresistible ante el cual los gobiernos sensatos y realistas no tienen otra opción que inclinarse;
- el estado debe ser prescindente, absteniéndose de interferir en la vida económica salvo algunas intervenciones puntuales en infraestructura. Versión actual de la teoría: privatizaciones, reducción del gasto público, desregulación de los mercados;
- el patrón oro, en la actualidad reemplazado por el patrón dólar y, en el caso argentino, por la convertibilidad sobre la base del “uno a uno”.

La crisis de 1929 puso fin al predominio entonces indisputado de la ortodoxia neoclásica. Así lo reconoció con excepcional agudeza John M. Keynes unos años antes del estallido de la crisis en un artículo notable, “El fin del *laissez-faire*”¹⁶. Para superar la crisis los gobiernos acudieron al proteccionismo, del que ya no se pudo volver; y se redefinieron radicalmente las funciones del estado, asistiéndose a una verdadera “estatificación” del proceso de acumulación capitalista. Prebisch¹⁷ advertía que sería funesto tratar de regresar a un modelo de gestión macroeconómica que había demostrado su radical inadecuación para enfrentar los problemas del desarrollo ya en la década de 1920 y que además comportaba ingentes costos sociales y políticos que mal podían imponerse a la población en un contexto democrático sin infligir graves daños a la trama misma de la sociedad y a la legitimidad del régimen democrático.

16. Raúl Prebisch, “El retorno de la ortodoxia”, en *Pensamiento Iberoamericano* (México) N° 1, Vol.1, 1982, 73-78.

17. John M. Keynes, “The end of *laissez-faire*” en *Essays in Persuasion*, New York and London, W. W. Norton, 1991 (1926).

EL HOLOCAUSTO SOCIAL PROVOCADO POR LAS POLÍTICAS NEOLIBERALES

Con relación a este tema, la evidencia histórica ofrece un veredicto no menos contundente. Lejos de ser portadoras del progreso social, las políticas neoliberales precipitaron un holocausto social sin precedentes en la historia de América Latina.

Esto se tradujo en un aumento dramático de la exclusión social, la pobreza y la vulnerabilidad de amplios sectores de las sociedades latinoamericanas¹⁸.

En efecto, en el marco de las políticas neoliberales implementadas casi sin excepción en toda la región en los años ochenta y noventa se observa una intensificación sin precedentes de la exclusión social y la pobreza. En su servil obediencia a los dictados del imperialismo y sus perros guardianes, nuestros gobiernos no se contentaron con establecer una economía de mercado sino que, yendo más lejos, dieron paso a lo que Pierre Mauro denominara una “sociedad de mercado”, es decir, una sociedad en la cual los derechos ciudadanos son redefinidos desde una lógica mercantil, produciendo por esa vía la desprotección de grandes masas de nuestras poblaciones. El paso de una a otra está mediado nada menos que por la capitulación estatal y la bancarrota de sus capacidades de intervención y gestión, lo que coloca objetivamente al estado y a la sociedad como rehenes del mercado, y a éste en condiciones de desarrollar hasta el límite el darwinismo social que permite seleccionar a los más aptos y eliminar a los que no lo son: niños, viejos, enfermos, adultos no reciclables laboralmente, etcétera.

No hace falta aportar demasiados antecedentes en esta materia: los datos sobre la exclusión social, la injusticia y la explotación imperantes en las sociedades latinoamericanas han conmovido inclusive a algunos de los espíritus más reposados y las burocracias internacionales más conservadoras, como la del Banco Mundial, por ejemplo. La insatisfacción ante los decepcionantes resultados del ajuste neoliberal se revela ya entre sus más decididos partidarios. Hacia finales de la década de los noventa Joseph Stiglitz, a la sazón uno de los vice-presidentes del Banco Mundial, proclamaba la necesidad de fundar un consenso “post-Washington”¹⁹. Pocos años más tarde este mismo economista, rápidamente despedido por el Banco Mundial debido al contenido de sus declaraciones, publicaría una serie de trabajos en los que demostraría, con base en una abrumadora experiencia internacional, que las recomendaciones del catecismo neoliberal no funcionan²⁰. No sirven para salir de la crisis, para crecer, para resolver los pro-

18. Alicia Ziccardi (compiladora), *Pobreza y Políticas Sociales en América Latina*, Buenos Aires, CLACSO, 2002.

19. Joseph Stiglitz, “Más instrumentos y metas más amplias para el desarrollo. Hacia el consenso post-Washington”, en *Desarrollo Económico Revista de Ciencias Sociales*, Buenos Aires, Vol. 38, N° 151, Octubre/Diciembre, 1998.

20. Joseph Stiglitz, *Globalization and Its Discontents*, New York and London: W.W. Norton & Company, 2002. Joseph Stiglitz “What I learned at the world economic crisis,” en *The New Republic*, April 17, 2000.

blemas del flanco externo ni para aliviar la deuda social. En la misma dirección se han movido, en los últimos años, si bien de manera un tanto más cautelosa, otros economistas otrora convencidos de la bondad del recetario neoliberal, como Jeffrey Sachs, por ejemplo.

Las consecuencias pauperizadoras de estas políticas fueron advertidas, ya al promediar la década de los ochenta, por Agustín Cueva²¹, cuando observara la aparición y rápida generalización en nuestras sociedades de dos nuevas figuras sociológicas: el mendigo y el narcotraficante, síntomas evidentes de la descomposición social y la crisis económica ocasionada por las políticas del Consenso de Washington. “O se vive de la caridad del Norte”, decía Cueva, “o se trafica con drogas”. Lo que caracteriza a las clases y capas populares, esos dos tercios o cuatro quintos que en América Latina quedan “fuera de juego”, es un profundo proceso de desintegración social. El tan mentado discurso del “fin de la clase obrera”, tan caro a algunos espíritus, lejos de reflejar la superación de la explotación de clase y la aparición de una nueva categoría de trabajadores asalariados, remite más bien a un proceso de pavorosa disolución de lo social y de repliegue hacia un ultra-individualismo que difícilmente pueda ser saludado como un tránsito hacia una sociedad mejor.

De proseguir estas tendencias, y si los gobiernos de la región no abandonan definitivamente el recetario del Consenso de Washington, este deplorable continuismo terminará transformando a nuestras sociedades en un símil del estado de naturaleza hobbesiano, una especie de guerra de todos contra todos en donde la supervivencia misma de la sociedad civil estará puesta en discusión. No es necesario ser extremadamente pesimista para constatar la existencia incipiente de algunos de estos rasgos “hobbesianos” en diversas sociedades latinoamericanas y caribeñas. La destrucción –o radical debilitamiento– de la sociedad civil, que en su clásico estudio Karl Polanyi certeramente adjudicara a las fuerzas disolventes del mercado, es ya una realidad en la mayoría de los países de la región²². La ruptura de la trama social y la desarticulación de la red de actores colectivos que en un pasado no demasiado remoto integraban a la sociedad de clases en el capitalismo periférico han dado rienda suelta a profundas tendencias antisociales. El individualismo anómico, el “sálvese quien pueda” como patrón cultural y el desmantelamiento de las organizaciones populares han instaurado la violencia más descarada como la forma normal de las relaciones sociales. Este deterioro es, sin duda, resultado de una verdadera y apenas declarada “guerra social” que, librada por el neoliberalismo, conduce al progresivo exterminio de los pobres. En vez de combatir la pobreza, observaba con ironía Noam Chomsky, los gobiernos neoliberales se han dedicado a combatir a los pobres. De ahí la verdadera “privatización” de la

21. Agustín Cueva “Problemas y perspectivas de la teoría de la dependencia”, en *Teoría social y procesos políticos en América Latina*, México, Editorial Edicol Línea Crítica, 1979.

22. Karl Polanyi, *La gran transformación*, México, Fondo de Cultura Económica, 1992.

violencia a que asistimos en nuestros países, en donde un verdadero ejército de guardias privados tiene a su cargo la custodia de los ricos mientras un número creciente de indigentes carece de lo más elemental para asegurar su sustento. Este cuadro, unido a la crisis fiscal y la deserción estatal, que entre otras cosas hace que no se pueda financiar algo tan elemental para la convivencia civilizada como la administración de justicia, precipitó el florecimiento de diversas prácticas tendientes a “hacer justicia por mano propia”, en un abanico que va desde el “justiciero” de clase media que se siente moralmente autorizado a balear a un adolescente marginal que intenta robar la radio de su auto, hasta el “linchamiento” popular detonado por la indiferencia de la justicia ante la suerte de los más pobres, pasando por numerosas formas intermedias.

EL ATAQUE A LA DEMOCRACIA

El tercer y último aspecto que quisiéramos examinar en estas páginas es el relativo al debilitamiento sufrido por nuestros países a causa del efecto corrosivo de las políticas del Consenso de Washington. Estas, lejos de haber consolidado nuestras nacientes democracias, operaron en un sentido exactamente inverso, y las consecuencias las estamos pagando hoy. Es por eso que luego de un período de casi dos décadas los logros de los capitalismo democráticos latinoamericanos no lucen como demasiado excitantes ni atractivos. La sociedad actual es más desigual e injusta que la que le precediera. Si entre 1945 y 1980 los países latinoamericanos experimentaron un módico progreso en dirección de una cierta mayor igualdad social, y si en ese mismo período experiencias de distinto tipo, desde variantes del populismo hasta algunas modalidades del desarrollismo, se las ingeniaron para sentar las bases de una política que en algunos países fue agresivamente “inclusionista” y tendiente a “ciudadanizar” a grandes sectores de nuestras sociedades otrora privados de todo derecho, el período que se inicia a partir de la crisis de la deuda tiene un signo manifiestamente contrario. Se cancela una tendencia y se inicia otra, en sentido exactamente contrario al anterior. En esta nueva fase, celebrada como la definitiva reconciliación de nuestros países con los inexorables imperativos del mercado y la globalización, viejos derechos –como la salud, la educación, la vivienda, la seguridad social– fueron abruptamente “mercantilizados” y convertidos en inalcanzables mercancías, lanzando a grandes masas de nuestras sociedades a la pobreza y la indigencia; las precarias redes de solidaridad social fueron demolidas al compás de la fragmentación social ocasionada por las políticas económicas ortodoxas y el desenfrenado individualismo promovido por los nuevos valores dominantes que proyectaban los amos del mercado tanto como la dirigencia política que comandaba estos procesos; y los actores colectivos y las fuerzas sociales que en el pasado canalizaron las aspiraciones y las demandas de las clases y capas populares –los sindicatos, los partidos populistas y de izquierda, las asociaciones populares, etc.– fueron debilitados o sim-

plemente barridos de la escena. De este modo los ciudadanos de nuestras democracias se vieron atrapados por una situación paradójica: mientras que en el “cielo” ideológico del nuevo capitalismo democrático se exaltaba la soberanía popular y el amplio repertorio de derechos consagrados constitucionalmente, en la prosaica “tierra” del mercado y la sociedad civil los ciudadanos eran despojados prolijamente de esos derechos por medio de crueles y acelerados procesos de “desciudadanización” que los marginaban y excluían de los beneficios del progreso económico y la democracia.

En nuestros países, en suma, la democracia corre el riesgo de ser ese “cascajón vacío” del que tantas veces ha hablado Nelson Mandela, en donde medra una clase política cada vez más irresponsable y corrupta, indiferente ante la suerte de la ciudadanía. Que esto ya es así lo demuestra la enorme desconfianza popular ante la clase política, los partidos y los parlamentos, un fenómeno que se registra en cada uno de los países de la región, si bien en no todos los casos con similar intensidad.

No debiera sorprendernos, en consecuencia, encontrar que los resultados de las encuestas de opinión pública en América Latina demuestran altos niveles de insatisfacción con el desempeño de nuestros regímenes democráticos. Mediciones recientes hechas por Latinobarómetro han arrojado resultados sumamente preocupantes: sólo el 25% de la población de la región se declaraba satisfecho con la democracia en 2001 pese a que en 1997 esa proporción alcanzaba al 41%. No sorprende entonces comprobar que el apoyo al régimen democrático haya también descendido hasta llegar al 48% de una muestra de diecisiete países de América Latina. En relación a la satisfacción, sólo dos países contaban con una proporción mayor del 50% que se declaraban “satisfechos” ante el funcionamiento de la democracia: Uruguay (55%) y Costa Rica (51%). En México sólo 26% compartía este sentimiento, 23% en Chile, 21% en Brasil, 20% en Argentina y 10% en Colombia²³. En los meses posteriores al colapso económico e institucional de la Argentina, el índice de satisfacción descendió hasta un abismal 7%²⁴.

En términos más generales podría decirse que lo que ocurre es que, en el nuevo contexto ideológico signado por el primado del neoliberalismo, la participación ciudadana en la cosa pública fue sistemática y sutilmente desalentada. La “norteamericanización” de la política latinoamericana visible en las campañas políticas, la dilución ideológica de la competencia electoral, la obsesión de los grandes partidos por ocupar el “centro” del espectro ideológico, y el primado de la videopolítica, con sus insulsos discursos y sus rebuscados estilos publicitarios, también se deja sentir en la persistente promoción de la indiferencia y la apatía

23. Latinobarómetro 2001 <www.latinobarometro.org/ano2001>

24. Adrián Ventura, “Los argentinos, insatisfechos con la eficacia de la democracia”, en *La Nación*, Buenos Aires, 23 de Septiembre, 2002, 7.

políticas. Estas últimas son típicas de la vida pública de Estados Unidos, y lejos de ser rasgos circunstanciales, obedecen al diseño constitucional forjado por los padres fundadores de la constitución norteamericana que no ahorraron argumentos para desalentar, o impedir, la participación de la plebe en los asuntos públicos. Así, Estados Unidos es el único país del mundo en el que las elecciones –presidenciales, legislativas o de gobernadores– se realizan en días laborales. No hay feriado que facilite la participación ciudadana en el acto electoral. En el caso latinoamericano, el desaliento a la participación política tiene que ver en primer lugar con la satanización experimentada por el estado y, junto a él, por todo lo perteneciente a la esfera pública. La propaganda neoliberal ha cosechado un gran éxito al hacer que la esfera pública sea percibida como un ámbito en donde prevalecen la corrupción, la venalidad, la irresponsabilidad y la demagogia. Un lugar, en síntesis, en el que ninguna persona honesta debería preocuparse por estar. Este proceso contrasta vivamente con la simétrica exaltación de las virtudes del mercado y, posteriormente, de la “sociedad civil”, concebida ésta sin ninguna de las diferenciaciones clasistas, sexistas y racistas que la marcan indeleblemente en los capitalismo contemporáneos²⁵.

A lo anterior habría que agregar dos consideraciones adicionales: el hecho de que las estrategias colectivistas de intervención política hayan caído igualmente en desgracia en favor del acérrimo individualismo que prevalece en los mercados, y la banalización de la política y de las instancias participativas de la ciudadanía –ejemplificados en la dictadura de los mercados y en el hecho de que éstos, como lo recordaba George Soros, “votan todos los días”–, lo que terminó por ahuyentar a los ciudadanos de los comicios y promover la “privatización” de sus actividades. Si todos los partidos elaboran un mismo discurso, si todos pretenden captar un supuesto “centro” político e ideológico, si nadie quiere diferenciarse y exponerse a la condena de los dueños del dinero, y si todos se empeñan en gobernar en función de los dictados del mercado, ¿para qué molestarse en buscar información, registrarse e ir a votar?

En suma: difícilmente podría sostenerse que un “paraíso neoliberal” de las características que conocemos en nuestra región sea demasiado propenso al desarrollo de una sociedad integrada y sin exclusiones, o al sostenimiento de la democracia política y la participación ciudadana en la vida pública. Más bien parecería ser el escenario propicio para el resurgimiento de nuevas formas de despotismo político. En consecuencia, las insustanciales democracias de América Latina están sufriendo los embates no ya de las “reformas orientadas al mercado”, como eufemísticamente se las llama, sino de una auténtica contrarreforma social dispuesta a llegar a cualquier extremo con tal de preservar y reproducir las estructuras de la desigualdad social y económica de nuestra región, con todos los privilegios que

25. Para una excelente discusión sobre la sociedad civil consultar Ellen Meiksins Wood, *Democracia contra capitalismo*, México D.F., Siglo XXI Editores, 2000 (1995).

ellas representan para los grupos dominantes. Esta contrarreforma tiene por objetivo declarado hacer que los rigores del mercado actúen como incentivos para motivar conductas supuestamente más racionales e innovadoras de los agentes económicos. Esta es la línea fundamental de los razonamientos de F. von Hayek, y su intransigente prédica en contra del igualitarismo y el colectivismo²⁶ (Hayek, 1944). En sus propias palabras: “la desigualdad, insoportable para tantos, ha sido necesaria para lograr el nivel de rentas relativamente alto de que hoy disfrutan en Occidente la mayoría de las personas”²⁷. Por eso no cabe la menor duda de que, tal como lo ha observado Gosta Esping-Andersen en repetidas ocasiones, un buen indicador de la mayor o menor justicia social existente en un país está dado por el grado de “desmercantilización” de la oferta de bienes y servicios básicos requeridos para satisfacer las necesidades de los hombres y mujeres concretos que constituyen una comunidad. La “desmercantilización” significa que una persona puede sobrevivir sin depender de los caprichosos movimientos del mercado. Ella “fortalece al trabajador y debilita la autoridad absoluta de los empleadores. Esta es, exactamente, la razón por la cual los empleadores siempre se opusieron a ella”²⁸. Allí donde la provisión de la educación, la salud, la vivienda, la recreación y la seguridad social –para citar las instancias más corrientes– se encuentre liberada de los sesgos clasistas y excluyentes introducidos por el mercado, será posible contemplar los contornos de una sociedad más justa y de una democracia más robusta. La otra cara de la mercantilización es la exclusión, porque ella significa que sólo quienes tienen dinero suficiente podrán adquirir bienes y servicios que en otras sociedades son inherentes a la condición ciudadana. Por el contrario, allí donde aquellos dependen del desigual acceso de sus habitantes en función de sus recursos económicos –es decir, ya no más concebidos como derechos ciudadanos de universal adjudicación– tropezaremos con la injusticia y todo el repertorio de sus aberrantes manifestaciones: indigencia y pobreza, desintegración social y anomia, ignorancia, enfermedad, las múltiples formas de la opresión y sus deplorables secuelas. Los países escandinavos y América Latina muestran los contrastantes alcances de esta dicotomía: por una parte, una ciudadanía política efectiva que se asienta sobre la universalidad del acceso a bienes y servicios básicos concebidos como una suerte de innegociable “salario del ciudadano” ya incorporado al “contrato social” de los países nórdicos y, de manera un tanto más diluida, al de las formaciones sociales europeas en general. El “salario del ciudadano” significa, en buenas cuentas, un certificado en contra de la exclusión social porque garantiza por la vía política e institucional el disfrute de ciertos bienes y servicios que, ante la ausencia de tal instituto, deben adquirir en el mercado aquellos sectores cuyos ingresos los facultan a ello²⁹. Por el con-

26. Friedrich A. von Hayek, *The Road to Serfdom*, Chicago, The University of Chicago Press, 1944.

27. Friedrich A. von Hayek, *Democracia, Justicia y Socialismo*, México, Diana Hayek, 1978, 53.

28. Gosta Esping-Andersen, *The Three Worlds of Welfare Capitalism*, Princeton, Princeton University Press, 1990, 22.

29. Samuel Bowles y Herbert Gintis, “The crisis of liberal democratic capitalism: the case of the United States”, en *Politics and Society*, Vol. II, N° 1, 1982, 70-78.

trario, las “nuevas democracias latinoamericanas”, con su mezcla de inconsecuentes procesos de ciudadanía política cabalgando sobre una creciente “desciudadanización económica y social”, culminan en una ciudadanía formal y fetichizada, vaciada de contenido sustantivo y segura fuente de futuros despotismos. De ahí que al cabo de tantos años de transiciones democráticas tengamos democracias sin ciudadanos, o democracias de libre mercado, cuyo objetivo supremo es garantizar la ganancia de las clases dominantes y no el bienestar de la ciudadanía.

A MODO DE CONCLUSIÓN

Quisiéramos concluir esta revisión panorámica de la última década de la historia latinoamericana con algunos interrogantes y algunas propuestas.

En primer lugar, conviene recordar las palabras de Walter Benjamin cuando dijera que “no hay síntoma más serio de la gravedad de la crisis que las cosas sigan como están”. ¿Seguirán como están? La coalición neoliberal en América Latina ha probado ser extraordinariamente poderosa e influyente. Las perspectivas de cambio que se abrieron con el ascenso del PT a la presidencia del Brasil a comienzos del 2003 parecen haberse diluido, toda vez que las políticas económicas implementadas por el gobierno Lula se inscriben, al menos hasta la redacción de estas líneas, dentro de los parámetros del Consenso de Washington.

El efecto-demostración de Brasil era importantísimo para potenciar la elaboración de políticas post-neoliberales en los otros países de la región. Pero el chantaje imperialista, unido a la extorsión interna que practican los “señores del dinero” y sus permanentes amenazas de producir un “golpe de mercado” o de promover una huelga de inversiones en el Brasil, parecen haber logrado poner de rodillas a un gobierno que llegó al Planalto rodeado de una inmensa legitimidad popular y que, poco tiempo después, adoptó un curso de acción animado por la suicida obsesión de pretender “tranquilizar a los mercados”. Ese y no otro fue el principio cardinal que orientó la política del gobierno de la Alianza en la Argentina, y que condujo a Fernando de la Rúa a un final apocalíptico y sangriento. Esta lección parece no haber sido aprendida por los actuales gobernantes brasileños.

Al momento de escribir estas líneas al gobierno de Lula le quedan poco más de seis meses para corregir su rumbo y evitar su eventual capitulación. Si esto llegara a acontecer, el futuro de las políticas post-neoliberales en América Latina se vería muy seriamente comprometido. En efecto, el PT es el primer partido que se hizo cargo del gobierno después del diluvio neoliberal, con el mandato de poner en marcha un programa post-neoliberal de reconstrucción económica y social. En Argentina, siempre pionera en materia de infortunios, el derrumbe del neoliberalismo se consumó mucho antes pero su alternativa política aún no pudo constituirse. La tradicional incapacidad de los sectores de la izquierda y centro-izquierda para constituir una alianza, siquiera electoral, para poner coto a las ambiciones de la derecha, conspiró

en contra de la construcción de dicha alternativa. En el caso del Brasil, en cambio, su gravitación internacional, su enorme extensión geográfica, el tamaño de su población, y la complejidad de su estructura económica, hacen que un presidente instalado en Brasilia cuente con un margen de maniobra inimaginable para cualquier otro de la región. Si Brasil no pudiera salir de la trampa del neoliberalismo y ensayar la aplicación de políticas post-neoliberales, ¿quién podría hacerlo?

Ahora bien, en caso de que la experiencia de Lula no concluyera como se espera, y teniendo en cuenta la indudable gravitación del Brasil en toda América Latina, parecería pertinente preguntarnos hasta qué punto este tipo de sociedad, que emerge tras el diluvio neoliberal, puede ser el sostén histórico de un proceso de democratización, o la plataforma desde la cual se construya una convivencia civilizada y respetuosa de los derechos fundamentales de la persona humana. ¿No deberíamos más bien esperar el surgimiento de fuertes tendencias hacia el mesianismo político, o hacia un fundamentalismo de derecha en caso de que los agentes de cambio y las fuerzas populares fracasasen en su empeño por cambiar el rumbo de la historia? ¿No estaremos, acaso, en presencia de un ominoso huevo de la serpiente neofascista?

Ante las protestas y los anhelos de cambio de las grandes mayorías de América Latina, los publicistas de la derecha insisten en la inexistencia de alternativas. Estamos condenados a esto, nos dicen. Cualquier otra cosa es un peligroso voluntarismo que se ilusiona con doblegar a las fuerzas inexpugnables de la globalización. Es más, los liberales no se cansan de plantear a sus adversarios la siguiente pregunta: ¿qué es lo que proponen? ¿Cuál es su modelo alternativo al de libre mercado?

En primer lugar es preciso rechazar de plano el supuesto de que para salir de la crisis actual es preciso contar con un modelo altamente elaborado en el plano de la teoría. Esto jamás ha ocurrido en la historia económica internacional. No ocurrió con el keynesianismo, cuya codificación fue posterior a la adopción de las nuevas políticas de intervención estatal puestas en marcha por los gobiernos antes de que en 1936 apareciera la *Teoría General* de Keynes³⁰. Tampoco ocurrió con el neoliberalismo, cuyas políticas, si bien se inspiraron en la producción teórica de Milton Friedman y Friedrich von Hayek³¹, tuvieron más que ver con las iniciativas concretas tomadas por los gobiernos de Margaret Thatcher en el Reino Unido y Ronald Reagan en Estados Unidos a comienzos de la década de los ochenta que con los postulados de una secta esotérica que año tras año se reunía casi clandestinamente en Mont Pélerin, Suiza³².

30. John M. Keynes, *Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero*, México, Fondo de Cultura Económica, 1943 (1936).

31. Milton Friedman, *Capitalism and Freedom*, Chicago: University of Chicago Press, 1962 y Milton Friedman y Rosa Friedman, *Libertad de Elegir*, Barcelona, Grijalbo, 1980.

32. Cf. Perry Anderson, "Neoliberalismo: un balance provisorio" en Emir Sader y Pablo Gentili, compiladores, *La trama del neoliberalismo* Buenos Aires, CLACSO, 2003, p. 25.

En segundo lugar, es posible establecer algunas orientaciones básicas de lo que debería ser una política post-neoliberal. Se requiere, antes que nada, dar una batalla sin tregua para lograr una auténtica reforma del estado. Es completamente ilusorio pensar que sin una reconstrucción integral del orden estatal podrá haber salida a la crisis. Para ello se requiere como mínimo tomar un conjunto de medidas, entre las cuales sobresalen las siguientes:

- el fortalecimiento fiscal del estado. Un estado pobre, carente de recursos, no puede desempeñar un papel positivo en la resolución de la crisis y sólo contribuye a agravarla;
- la jerarquización de la administración pública. No hay estado eficiente y operativo con servidores públicos mal pagos y carentes de reconocimiento social;
- la realización de una profunda reforma en el orden administrativo y burocrático tendiente a reorganizar el conjunto de los aparatos estatales en función de las nuevas e impostergables tareas que debe realizar;
- lucha frontal contra la corrupción, porque un estado corrupto poco y nada puede hacer, salvo enriquecer a los delincuentes que sobornan desde el mercado y la sociedad civil y a quienes aceptan el soborno desde la administración pública;
- redefinición de una nueva estrategia de intervención del estado en la vida económica y social, a partir de la constatación del hecho que las viejas modalidades e instrumentos propios de la era keynesiana requieren urgentes e imprescindibles modificaciones.
- mejorar los mecanismos de funcionamiento estatal, a fin de posibilitar la mayor transparencia y control ciudadano del proceso de toma de decisiones. Una experiencia digna de tener en cuenta es la del presupuesto participativo implementada en la ciudad de Porto Alegre, Brasil.

Pero estas medidas remiten, en última instancia, a la “madre de todas las batallas”: la reforma tributaria. En efecto, ninguna reforma del estado digna de ese nombre será posible en los estados latinoamericanos sin cortar de raíz la Hidra de las Siete Cabezas del “veto contributivo” que hasta hoy ejercen las clases dominantes. Sin atacar esta pesada herencia que proviene de la época colonial –¡los conquistadores y colonizadores no debían pagar impuestos, sino recibir tributos de los nativos!– no habrá estado dotado de las capacidades mínimas necesarias para estar a la altura de los desafíos de la hora actual. Esto supone, entonces, acabar con tan perversa tradición que gozan los ricos y las grandes empresas, situación tan escandalosa que hasta los propios informes y estudios del FMI parecen libelos ultra-izquierdistas más que documentos elaborados por fríos tributaristas. La lucha contra esta lacra social presupone asimismo un combate contra la

evasión y la elusión tributaria, y el diseño de una estructura impositiva que abandone la radical regresividad actual y la sustituya por un modelo de tributación progresiva. No es una meta descabellada proponer que, en un plazo de cinco años, la estructura tributaria de nuestros países adopte parámetros similares –no iguales, pero similares– a los que se registran en promedio no en los países nórdicos sino en la Unión Europea. Si no se hace es sencillamente porque falta la voluntad política para que en este mundo globalizado las empresas europeas, americanas y japonesas paguen impuestos aproximadamente semejantes a los que abonan sin chistar en sus propios países.

Un programa post-neoliberal exige, en segundo lugar, poner en marcha una profunda reforma política que perfeccione radicalmente la calidad de nuestras instituciones y prácticas democráticas. Esto supone garantizar mejores dispositivos para hacer efectiva la soberanía popular, condición esencial de cualquier régimen democrático. Por ejemplo, afinar instrumentos tales como el referéndum, el plebiscito y la consulta popular para hacer que la soberanía popular sea algo más que una invocación retórica; mejorar los sistemas de representación política; hacer que las legislaturas sean mucho más receptivas ante las demandas ciudadanas; instituir la revocabilidad de los mandatos; imaginar mecanismos que faciliten una mejor selección de los dirigentes de los partidos políticos y otras medidas similares que potencien el control democrático y “desde abajo” de los procesos de formación de la decisión pública.

Para ello resulta imprescindible, en consecuencia, emancipar a la política de los mercados. En nuestros días la política es financiada por las empresas y por los sectores adinerados. La política se ha convertido, en esta era *mass-mediática*, en una actividad sumamente onerosa que en nuestros países financian los ricos y poderosos. No es sino natural que, una vez elegidas, las nuevas autoridades gobiernen en exclusivo provecho de sus mandantes y financistas. Si tuvieran un improbable ataque de amnesia, algún que otro oportuno “golpe de mercado” les refrescaría la memoria inmediatamente. Por lo tanto, el financiamiento público y transparente de la vida política se constituye en un dato fundamental del nuevo ordenamiento democrático, mientras el acceso irrestricto a los medios de comunicación de masas es el otro pilar de una democracia perfeccionada. Pero ambas cosas suponen la existencia de un estado dotado de recursos suficientes. Y aquí vemos cómo se cierra perfectamente bien el círculo de la dominación plutocrática: se exige la reducción del gasto público y de la “carga impositiva,” a resultas de lo cual un estado débil no puede financiar pública y transparentemente la vida política, con lo cual ésta pasa a depender exclusivamente de las clases y grupos dominantes, los únicos que cuentan con el dinero para financiar la actividad de los partidos. Una vez concluido el acto electoral, los buitres adinerados se presentan por otra ventanilla del estado para exigir toda clase de prebendas y beneficios en desmedro del bienestar colectivo.

Por último, lo anterior requiere inexorablemente la puesta en vigor de nuevas políticas estatales orientadas a la provisión de un conjunto de bienes públicos que en épocas recientes sufrieron agudos procesos de “mercantilización”. Ése y no otro fue el camino recorrido por las naciones europeas en la segunda posguerra, un camino que permitió en un mundo devastado por el conflicto bélico la reconstrucción de la economía y de la sociedad civil. Estas nuevas políticas públicas, completamente antitéticas en relación a las emanadas del Consenso de Washington, no sólo representan un fin noble en sí mismas sino que, además, constituyen un aporte fundamental para la reconstrucción de una sólida legitimidad democrática que a su vez es imprescindible para dotar al estado de la fortaleza requerida para disciplinar a las fuerzas del mercado, encuadrar a los grandes capitales y neutralizar la presión de otros estados más poderosos. Un estado, en una palabra, que recupere la soberanía económica y política perdida, que perfeccione el orden político y que permita emprender la impostergable reconstrucción de la sociedad civil.

Quisiera terminar estas líneas recordando las sabias palabras de Bertolt Brecht con las cuales iniciáramos este prefacio. Ellas son más apropiadas que nunca para orientar nuestra práctica en tiempos como éstos. Si queremos cambiar el mundo, y no sólo contemplarlo o interpretarlo, el punto de partida es ser totalmente intransigentes en nuestro rechazo de la barbarie que el capitalismo como modo de producción ha impuesto a la humanidad. Este libro pretende, dentro de sus modestos límites, alimentar esa actitud.